

RE: RV:

Juzgado 07 Civil Circuito - N. De Santander - Cúcuta <jcivccu7@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 6/06/2022 9:07 AM

Para: Juzgado 07 Civil Municipal - N. De Santander - Cúcuta <jcivmcu7@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordial saludo, recibido.

Horario de lunes a viernes de 08:00 A 12:00 pm. y de 1:00 a 5:00 pm.

Atentamente,

JAIME ELIECER ALMEYDA ROJAS

Asistente Judicial

Juzgado 07 Civil Circuito de Cúcuta

De: Juzgado 07 Civil Municipal - N. De Santander - Cúcuta <jcivmcu7@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: lunes, 6 de junio de 2022 8:42 a. m.

Para: Juzgado 07 Civil Circuito - N. De Santander - Cúcuta <jcivccu7@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV:

Remito correo enviado por equivocación a este Juzgado

Cordialmente,

Juzgado Séptimo Civil Municipal de Oralidad de Cúcuta

Palacio de Justicia Oficina 314-A

Teléfono. 5753334

Cúcuta - Colombia



Salva un árbol, no imprimas este e-mail si no es indispensable

De: Arnaldo Trujillo <arnaldotrujillo68@gmail.com>

Enviado: viernes, 3 de junio de 2022 4:57 p. m.

Para: Juzgado 07 Civil Municipal - N. De Santander - Cúcuta <jcivmcu7@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
yayita1174@yahoo.es <yayita1174@yahoo.es>

Asunto:

IMPUGNACION INTERLOCUTORIO 27 DE MAYO 2022. TRASLADO PARTE DEMANDANTE



Arnaldo Trujillo <arnaldotrujillo68@gmail.com>

IMPUGNACIÓN

2 mensajes

Arnaldo Trujillo <arnaldotrujillo68@gmail.com>
Para: yayita1174@yahoo.es

3 de junio de 2022, 16:37

IMPUGNACIÓN ITERLOCUTORIO DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2022



IMPUGNACIÓN AUTO DEFINICIÓN AVALÚO DE INMUEBLE.pdf
945K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: arnaldotrujillo68@gmail.com

3 de junio de 2022, 16:37

**No se encontró la dirección**

Tu mensaje no se entregó a **yayita1174@yahoo.es** porque la dirección no se encuentra o no puede recibir correos electrónicos.

Respuesta del servidor remoto:

552 1 Requested mail action aborted, mailbox not found

Final-Recipient: rfc822; yayita1174@yahoo.es
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mx-eu.mail.am0.yahoodns.net. (188.125.72.73, the server for the domain yahoo.es.)
Diagnostic-Code: smtp; 552 1 Requested mail action aborted, mailbox not found
Last-Attempt-Date: Fri, 03 Jun 2022 14:37:50 -0700 (PDT)

----- Mensaje reenviado -----
From: Arnaldo Trujillo <arnaldotrujillo68@gmail.com>
To: yayita1174@yahoo.es
Cc:
Bcc:
Date: Fri, 3 Jun 2022 16:37:35 -0500
Subject: IMPUGNACIÓN
----- Message truncated -----

ARNALDO TRUJILLO QUIJANO

ABOGADO

Señora

Juez Séptimo Civil del Circuito de Oralidad de Cúcuta

E. S. D.

Radicado No. 54-001-31-03-0002-2003-00052-00

Proceso: Ejecutivo

Demandante: Dora Mercedes Muñoz Ortegón

Demandados: Álvaro Gómez Rincón y Otros (en calidad de Herederos del fallecido Inocencio Gómez Niño) y otros

Impugnación de auto que acoge avalúo catastral de inmueble como definitivo y desecha el dictamen pericial aportado para determinar valor real de carácter comercial del inmueble perseguido en el litigio.

ARNALDO TRUJILLO QUIJANO, abogado titulado y en ejercicio, identificado con la C.C. No. 13248.360 de Cúcuta y portador de la T.P. No. 51.881 del C.S. de la J., obrando en calidad de apoderado de la parte demandada **ÁLVARO GÓMEZ RINCÓN** en este asunto, con el debido respeto interpongo los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el auto de fecha 27 de mayo de 2022, y que fue notificado por estado electrónico del día martes 31 de mayo del año en curso, debido a que decidió acoger como avalúo oficial del inmueble perseguido en este asunto, al valor catastral aumentado en un 50 %, y desechó el dictamen pericial aportado sobre el inmueble perseguido en el litigio, con el fin de determinar su avalúo comercial, y por consiguiente me aparto del criterio del Juzgado y procedo a controvertir la respectiva providencia en los siguientes términos:

En el proceso que nos ocupa, el suscrito manifestó oportunamente que no se está de acuerdo con la estimación económica que se le estableció al bien raíz con fundamento en el avalúo catastral allegado por la parte ejecutante, el cual asciende a la suma de **CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS (\$ 420.945.000.00) MCTE.**, aumentado en **un 50 %** como lo dispone el **artículo 444 del Código General del Proceso**, para arrojar como resultado la cifra final de **SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$ 631.417.500.00) MCTE**, como valor de referencia eventual para una futura almoneda, pero se ha venido insistiendo en que tal cifra monetaria no corresponde en la realidad al valor comercial que efectivamente tiene ese inmueble, teniendo en cuenta su ubicación, su composición física, estructura, estado de conservación, sector comercial en que se encuentra localizado, áreas de metraje cuadrado en su terreno y construcción, uso mixto del mismo **(destinado actualmente para uso comercial y de vivienda urbana)**, vías de acceso, rutas de transporte público, servicios públicos domiciliarios y demás

ARNALDO TRUJILLO QUIJANO

ABOGADO

aspectos que siempre deben tenerse en cuenta para establecer con coherencia el precio comercial de un bien de tales características.

Para rebatir con mérito el monto de referencia catastral mencionado, a través de perito evaluador debidamente inscrito y con la experiencia e idoneidad profesional requerida, se contrató la elaboración de experticia técnica que determinara el avalúo comercial del inmueble identificado con la **matrícula No. 260-48536 de este círculo y ubicado en la Avenida 11 No. 9-08 del Barrio El Llano de esta ciudad**, quien elaboró dictamen que arrojó como conclusión que el valor del bien raíz asciende a la suma de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS (\$ 843.663.000.00) MCTE., cifra muy superior a la señalada en la providencia adiada el 1 de abril de 2022, en donde se corrió traslado a la parte demandada del avalúo catastral aportado por la ejecutante en este negocio.**

Según lo previsto en el **numeral 2 del artículo 444 del estatuto de enjuiciamiento**, la parte que no allegó el avalúo inicial, puede hacer uso del derecho de asomar su propio avalúo, y ésta potestad se ejerce en este momento con base en el trabajo valuatorio realizado por un profesional especializado en la materia como lo dispone el **numeral 1 del citado artículo adjetivo**.

En este caso particular, se encomendó al **Ingeniero JOSÉ ROSARIO BONILLA BOADA**, quien se encuentra debidamente matriculado e inscrito como perito evaluador en el **ERA AVAL**, además de contar con la suficiente trayectoria y experiencia profesional en el ramo para que rindiera dictamen acerca del avalúo comercial del inmueble mencionado previamente, acompañado del respectivo registro fotográfico del bien inspeccionado para la elaboración de la experticia, y su monto dictaminado es superior ampliamente al resultante del aumento proporcional previsto normativamente frente al valor catastral de dicho predio, por lo que se solicitó que se surtiera el respectivo traslado y si no tenía reparos, el Despacho procediera a optar por acoger el valor superior como el oficial del respectivo avalúo y que sirva de referente para una futura subasta pública del bien, en aras de no causar más afectación a los derechos patrimoniales de la parte demandada que ve perseguido el bien de su propiedad.

Inentendiblemente el Juzgado profiere el auto de fecha 27 de mayo de 2022, en donde resuelve acoger como definitivo al monto resultante del avalúo catastral debidamente aumentado en la porción legal contemplada por el artículo 444 del estatuto procesal, y se base en una serie de planteamientos fácticos extraños y ajenos a la realidad procesal del expediente como la intervención de una perito evaluadora que desconozco su origen y vinculación al caso concreto, y una serie de elementos relacionados con el inmueble como si este hubiese sido materia de reconstrucción, además de enfatizar en los procedimientos de avalúos ordenados en el marco de la Ley 388 de 1997, esto es, la Ley de

ARNALDO TRUJILLO QUIJANO

ABOGADO

Ordenamiento Territorial, cuando correctamente la normatividad aplicable en materia de práctica de avalúos y su elaboración es la Ley 1673 de 2013.

En la providencia en cuestión taxativamente el Juzgado de conocimiento expuso como argumentación de su criterio esbozado, lo siguiente:

" (...)

De acuerdo con el informe presentado por la pasiva, rendido por la evaluadora certificada Rocío del Pilar Bautista Vargas con Registro Nacional de Avaluadores - RNA 3582 y Registro Abierto de Avaluadores - AVAL - 60370566, el avalúo debía sujetarse a la metodología contenida en la resolución 620 del 23 de septiembre de 2008 del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", que describe los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la ley 388 de 1997.

Conforme a la verificación efectuada por la citada profesional, de acuerdo a la metodología empleada en la experticia comercial, para la estimación de la reconstrucción del inmueble se utilizó el método de costo de reposición del bien inmueble.

Indicó la evaluadora que en el informe, se investigaron 2 predios con el fin de obtener el valor del metro cuadrado del terreno y las muestras deben ser representativas para poder recoger resultados, conocimientos y observaciones en los que se puede confiar como representación de la población más amplia que se está estudiando, por ejemplo, el muestreo representativo suele ser el mejor método para los estudios de mercado.

Si no existe una buena representatividad, seguramente se tendrán datos inexactos, por lo cual dos muestras no se entienden suficientemente viable.

Según el concepto del perito, el valor de reposición no se encuentra liquidado de acuerdo a la Resolución 620 de 2.008 expedida por el IGAC y además, en cuanto al área de construcción, se evidencia que hay dos cantidades totalmente diferentes en su determinación en cuanto al área construida del predio..."

Sorprende de sobremanera a la parte demandada y al suscrito tal argumentación en lo concerniente a que se trae a colación una serie de elementos novedosos y desconocidos para esta defensa técnica, pues en ningún momento se conoce el origen de la intervención de la susodicha perito evaluadora que se menciona en el auto recurrido, y menos se conocen las referencias fácticas que ésta hace acerca del inmueble en cuanto a su

ARNALDO TRUJILLO QUIJANO

ABOGADO

descripción física, aludiendo a una supuesta reconstrucción del bien y otros ejes temáticos que asaltan sorpresivamente a este extremo procesal, sin que se nos haya corrido traslado de tal información previamente ni tampoco se sabe de que se trate de una prueba de oficio que el Juzgado haya ordenado para un mejor proveer y mucho menos de que la apoderada de la parte ejecutante la haya aportado como complemento o respaldo de su pretensión de fijación del avalúo señalado con fundamento en el monto catastral estimado, de donde se infiere que no se está obrando con lealtad procesal para permitir que este servidor se entere oportunamente de la información tenida en cuenta para adoptar semejante decisión tan trascendente para las resultas de la actuación en detrimento de los derechos e intereses de la parte que represento.

En este caso, ciertamente la parte demandante presentó un avalúo catastral ya referenciado anteriormente, pero no obstante, observamos que el mismo resulta ser inferior al avalúo comercial señalado mediante el dictamen pericial aportado por el suscrito en debida forma, por lo que resulta acertado en este punto resaltar que la **Corte Suprema de Justicia**, en la **Sentencia 4861-2017**, cuyo **Magistrado Ponente** fue el doctor **LUIS ALONSO RICO PUERTA**, señaló que el juez tiene el deber de ***“garantizar el objetivo que se persigue con la venta en pública subasta, que no es otro que obtener el mejor precio posible por el bien ofrecido”***, por lo que en el presente caso, al existir una diferencia de **DOSCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS (\$ 212.245.500.00) MCTE.**, respecto de los valores otorgados en cada avalúo que se encuentran en el acervo probatorio, se infiere que es una divergencia de cifras bastante significativa económicamente, y por consiguiente, **salta a la vista que existe un avalúo que resulta más beneficioso para el demandado**, por ser mejor el precio que puede ser ofrecido por su bien, cumpliéndose con ello los lineamientos normativos y jurisprudenciales trazados.

Es menester tener en cuenta también que el Decreto 1420 de 1998 fijó las normas, procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración de los avalúos por los cuales se determina el valor comercial de los bienes inmuebles, para su ejecución y adquisición entre otros por enajenación forzosa (art. 1 Numeral 1), fijando la vigencia de estos un (1) año, contado desde la fecha de su expedición o desde aquella en que se decidió la revisión o impugnación. (Artículo 19°).

Además, en la **Sentencia T-531/10 emitida por la Corte Constitucional**, se estableció que **la fijación del precio real como parámetro legalmente establecido también tiene la finalidad de proteger los derechos del deudor**, cualesquiera sean los supuestos en que se halle, ya que bien puede suceder que el valor del bien rematado no alcance para cubrir el monto de lo debido, caso en el cual al deudor le asiste la tranquilidad de pagar en la mayor medida posible y aún de poner a salvo otros bienes y recursos o de no comprometerlos en demasía. Pero también puede acontecer que el valor del inmueble rematado

ARNALDO TRUJILLO QUIJANO

ABOGADO

satisfaga lo adeudado, incluso de manera amplia, en cuyo caso el deudor tiene el derecho a liberarse de su obligación y a conservar el remanente que, sin lugar a dudas, le pertenece.

Es importante considerar que en el desarrollo de un proceso ejecutivo es deber de la autoridad judicial respectiva proteger tanto los derechos patrimoniales del acreedor como los derechos de los demandados. Así, si el juez de conocimiento hubiera aprobado un nuevo avalúo al bien objeto del remate, se habría garantizado de mejor manera la satisfacción de la acreencia, a la par, del equilibrio respecto de la contraparte, pues lo cierto es que no basta aportar el avalúo catastral con el incremento señalado en la ley, aunque sea suficiente para satisfacer el derecho patrimonial del acreedor, ya que la idoneidad de ese valor depende de su correspondencia con el precio real del inmueble hipotecado y no simplemente con la posibilidad de cubrir la suma adeudada y de satisfacer al acreedor, más aún cuando dicho valor es el que sirve de base para efectuar el remate.

Como sustentación adicional de estos recursos, expongo que es menester recordar que para estos casos que las directrices normativas nos indican que en procesos como el que nos ocupa (**esto es, el numeral 4, del artículo 444 del Código General del Proceso**), el avalúo o valor concedido al inmueble sería en principio el contenido en el **AVALÚO CATASTRAL** del respectivo bien, incrementado en un **CINCUENTA POR CIENTO (50 %)**, sin perjuicio de que alguna de las partes también pueda presentar otro avalúo diferente a éste, y de índole pericial, cumpliendo eso si con las exigencias de la actividad valuatoria consignadas en la **Ley 1673 de 2013**.

En este caso concreto, si bien es cierto que la parte ejecutante aportó un avalúo sobre el inmueble afectado con la cautela judicial ordenada por cuenta de este proceso, y que dicha valuación fue acogida por el Juzgado como precio de referencia monetaria del bien, no es menos verdad que el pluricitado avalúo no está acorde con la realidad del valor comercial del bien y tal situación está perjudicando los derechos de la parte demandada, y en consecuencia, no puede tenerse en cuenta en estos momentos para determinar el valor de referencia económica para una futura subasta.

Tampoco emerge del contenido del auto recurrido, elementos de juicio para determinar conforme la descripción que se hizo de la intervención de la desconocida perito **ROCÍO DEL PILAR BAUTISTA VARGAS** en este asunto, cuál es la época de referencia cronológica de la precisión del valor catastral del bien, ya que ese aspecto es importante a tener en cuenta, puesto que el Decreto 1420 del 24 de junio de 1998, emitido por el Ejecutivo Nacional (Presidencia de la República y Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Desarrollo Económico), en su artículo 19, dispone que “**Los avalúos tendrán una vigencia de un (1) año, contados desde la fecha de su expedición o desde aquella en que se decidió la revisión o impugnación.**”

ARNALDO TRUJILLO QUIJANO

ABOGADO

En virtud de esa norma, los avalúos catastrales solo se mantienen vigentes por espacio de un año y al superarse ese término, requieren actualización económica, pues genéricamente el bien no se pueden conservar estático en su precio o en el peor de los casos, decrecer en el mismo, salvo que se demuestre una situación extrema como ruina, deterioro, etc.

Igual suerte corren los avalúos comerciales sobre inmuebles y que son emitidos por entidades especializadas o peritos avaluadores debidamente registrados en el R.A.A.

Según las previsiones de la norma anteriormente mencionada, los avalúos sobre inmuebles tienen una temporalidad máxima de doce meses calendarios, o un año, en cuanto a su vigencia y aplicabilidad para ser tenidos en cuenta como monto de referencia para esta clase de asuntos, pues se torna injusta la situación de que sea posible que un avalúo antiguo sea mantenido vigente en el tiempo en detrimento del valor real del bien y de los derechos patrimoniales de la parte afectada con la persecución judicial de un activo de su haber económico.

Los fines del proceso ejecutivo no buscan hacer más gravosa la situación del demandado, pues el Juez siempre debe procurar por la preservación de la igualdad material entre las partes en conflicto, ya que así lo disponen los **artículos 4 y 7 del Código de los ritos**, en desarrollo del derecho fundamental consignado en el **artículo 13 Constitucional**, en concordancia con la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades, tal como lo contempla el **artículo 228 de la Carta Política en armonía con los artículos 229 y 230 íbidem**.

La **jurisprudencia ha establecido que el Juez tiene el deber imperativo de garantizar el propósito perseguido en el remate de bienes, el cual no puede ser otro que se obtenga el pago del mejor precio posible por el inmueble ofrecido en el respectivo remate**, y ello no se podría conseguir materialmente si se privilegia un avalúo distante del valor real del predio, o uno que se encuentre desactualizado y que no ha incrementado el valor del bien a subastar con el paso del tiempo, ya que contrario a los bienes muebles que tienden a depreciarse con el curso de los años, los inmuebles en cambio adquieren mayor valorización anualmente no solo en la estimación catastral que se considera para efectos tributarios del impuesto predial generado periódicamente a favor del municipio correspondiente, sino en materia comercial en cuanto a su precio, ya que en determinado período de tiempo puede ser susceptible de mejoras, obras públicas o privadas en el área de influencia de la localización geográfica del bien, presencia de servicios públicos sofisticados, cobertura de rutas de transporte urbano, seguridad ciudadana del sector de ubicación, comercialización de dicha zona, etc, los cuales son factores de incidencia directa que al hacer presencia infieren necesariamente en el

ARNALDO TRUJILLO QUIJANO

ABOGADO

incremento del precio final de vigencia para un inmueble de esa naturaleza, y esos elementos de juicio no pueden ser desconocidos por el Juzgado de conocimiento para mantener la temporabilidad de aplicación del avalúo aportado por la parte actora en época anterior a más de un año en el presente proceso.

Entonces, no pueden desconocerse estos aspectos tan primordiales que se han venido exponiendo en este memorial impugnatorio, y como en toda etapa procesal, le asiste el deber al Juez de ejercer el respectivo control de legalidad al tenor del **artículo 132 del estatuto procesal**, y en el marco de ese examen pormenorizado de la validez de la actuación adelantada, no sobra la evaluación de la idoneidad del valor asignado al monto valuatorio del inmueble que eventualmente se subastará en la venta forzada de que trata la almoneda consignada en el **artículo 448 de la Compilación Adjetiva**.

En este caso concreto, su Señoría pasó por alto tener en cuenta la marcada diferencia existente entre el valor resultante de la operación matemática prevista en el **artículo 444 del Código General del Proceso** respecto del avalúo catastral del bien, confrontado con el monto establecido en el avalúo pericial aportado oportunamente por el suscrito para rebatir la situación en conflicto, y ello significa una afectación a los intereses patrimoniales de la parte demandada como extremo agraviado con la venta forzada de índole judicial en el remate pretendido por la parte ejecutante, y entonces al resolver acoger como definitivo el primera mencionado, se privó de la situación de contar con un monto económico correcto y acertado como referente idóneo para cuantificar el valor real del precio del bien y su proporción que servirá de base a la licitación ordenada legalmente.

Además, es de vital importancia tener en cuenta que dentro de la técnica valuatoria y la normatividad que la regula, se tiene que el **numeral 7 del artículo 2 del Decreto 422 de Marzo 8 del 2000**, expedido por el Ministerio de Desarrollo Económico, en concordancia con el **artículo 19 del Decreto 1420 de Junio 24 de 1998**, emanado de la misma cartera Ministerial, el avalúo tendrá una vigencia de un año, pero incluso por las condiciones tan variables del mercado, se recomienda efectuar un reavalúo en periodos no mayores a seis (6) meses, tiempo el cual se considera, que el valor comercial puede cambiar.

Ciertamente, al revisarse los avalúos allegados al expediente por la parte actora puede apreciarse su falta de idoneidad para los efectos de la subasta, primero porque inicialmente se tornó demasiado antiguo y perdió vigencia legal, y ahora recientemente (**el que fue materia de adopción definitiva**), porque es demasiado inferior al verdadero valor comercial del bien raíz, y aunque en la práctica tal situación pudiera haberse superado por la gestión del propio Juzgado, ya que éste debió haberse detenido a verificar si el referido avalúo era o no idóneo para los efectos del remate, habida cuenta que la antigüedad del mismo emergía y por el paso normal del tiempo, era lógico que perdiera su aplicación temporal, pues mantener estático el valor del inmueble era afectar los derechos de la parte ejecutada y causarle un detrimento patrimonial que le representaría licitar el precio de venta del bien en los términos fijados por el

ARNALDO TRUJILLO QUIJANO

ABOGADO

Juzgado y finalmente acoger como efectivamente lo hizo el estrado, el avalúo inferior, es atentar contra los derechos del extremo demandado haciendo más gravosa su situación en esta contienda procesal.

Vale la pena traer a colación lo dispuesto en el fallo identificado como **STC 4861-2017 de la Corte Suprema de Justicia**, que en su **Sala de Casación Civil, y dentro de su Radicado No. 63001-22-14-000-2017-00028-01 (Aprobado en sesión del cinco de abril de dos mil diecisiete)**, de fecha **5 de abril de 2017-M.P. Dr. Luís Alonso Rico Puerta**.

Al respecto la Corte Suprema de Justicia expuso que:

“...El precedente de esta Corte señala que para resolver la duda razonable sobre el avalúo tomado como base del remate, el juez debe hacer uso de la facultad-deber de decretar pruebas oficiosas que acerquen el valor real del bien al que habrá de servir para la subasta, precisando que:

«Es verdad que el sentenciador debe adoptar una conducta imparcial que haga efectiva la igualdad de las partes en el proceso, pues ese deber se lo impone el numeral 2º del artículo 37 del estatuto adjetivo; pero ello no significa –como en ocasiones pretéritas lo ha advertido esta Corte– que no se encuentre comprometido con la justicia y que no le asista la obligación de buscar, más allá de la simple verdad formal, la verdad material que los usuarios exigen de la judicatura.

(...) De manera que el juez estaba en capacidad de advertir, de acuerdo con las reglas de la experiencia, si el avalúo era notoriamente bajo, en cuyo caso le asistía la obligación legal de decretar de oficio las pruebas que resultaban necesarias para llegar a la convicción sobre el verdadero valor del inmueble» (CSJ STC de 28 de septiembre de 2012, exp. 2012-02093-00).

En ese mismo sentido esta Corporación ha sostenido:

«... el criterio de razonabilidad indica –y así lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte– que cuando el funcionario judicial alberga dudas sobre el valor real del bien que se someterá a la almoneda, está obligado a despejar toda incertidumbre, aún de oficio, con el fin de garantizar el objetivo que se persigue con la venta en pública subasta, que no es otro que obtener el mejor precio posible por el bien ofrecido, según su estimación real en el mercado, de modo que se beneficien los intereses económicos de ambas partes.

Pero de ninguna manera puede aceptarse, por ser una conclusión absurda y contraevidente, que las normas procesales son una limitante para lograr ese objetivo, ni mucho menos que deba proponerse el bien por un valor manifiestamente inferior al que determinan las leyes de la oferta y la demanda, pues no cabe duda que esto último generaría un grave e injustificado perjuicio económico a la parte demandada, lo cual no es, en modo alguno, el propósito del proceso ejecutivo.

ARNALDO TRUJILLO QUIJANO

ABOGADO

A tal respecto esta Corporación ha manifestado que cuando el dictamen que obra en el expediente no se adecua al valor real del bien, el funcionario judicial está obligado a indagar por la verdad material que subyace al asunto del que conoce, pues no le es dable asumir una actitud de completa indiferencia cuando las pruebas muestran una falta de correspondencia con la realidad» (CSJ STC8710-2014, 7 jul. 2014, rad. 00861-01).

Y reiterando sobre la obligación que tiene el juez de conocimiento de verificar si el certificado catastral es idóneo para cuantificar el valor del bien, porque las certificaciones emitidas por las entidades catastrales muchas veces no están actualizadas con las características actuales del predio, la Corte ha venido señalando que:

«ni las partes, ni el juez pueden desconocer que en algunas ocasiones, el valor que catastralmente es asignado a un bien por las secretarías de hacienda de los municipios y por el departamento administrativo de catastro en el caso de la capital de la República, no es representativo de un valor presente, como tampoco de modificaciones, adecuaciones u otras circunstancias, que tienen entidad para incrementar su apreciación económica» (CSJ SC 28 sep. 2012, exp. 2012-2093-00, reiterada en STC10365-2014, 8 ago. 2014, rad. 00097-01).

4. En este orden, siendo claro que no estaban dadas las condiciones necesarias para señalar fecha y hora para llevar a cabo la licitación, al sostener el juez lo contrario, aun cuando la parte ejecutada hizo ver las irregularidades que conllevaron a esa postura y el daño patrimonial que generaba subastar un bien por un valor irrisorio, el Despacho obvió el hecho de que con ese certificado no se cumplía cabalmente la exigencia del artículo 444 del Código General del Proceso, en tanto no refería al catastral como legalmente se exige y no tuvo en cuenta el porcentaje a rematar.”

Caso de Referencia anterior: Acción de Tutela en Segunda Instancia promovida por **Ana María Grajales López** contra el **Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia, y vinculación de un tercero, en el cual se revoca el fallo de primer grado del Tribunal Superior de Armenia, y se concede el amparo invocado.**

Con base en la decisión judicial asomada como referente, se tiene que el **artículo 4 del Código General del Proceso**, contempla que el Juez debe hacer uso de los poderes que dicho Compendio Normativo le otorga para lograr la igualdad real entre las partes, así las cosas no debe dejarse de un lado la previsión del **artículo 167 del mismo Estatuto** en lo concerniente a la potestad del decreto de pruebas de oficio dentro del poder instructor del operador de justicia para asegurar que esa igualdad real entre los extremos del litigio se haga efectiva.

Según la tesis sostenida por la Corte Suprema de Justicia al resolver sobre la impugnación en segunda instancia del fallo primigenio, el Juez tiene el deber

ARNALDO TRUJILLO QUIJANO

ABOGADO

de garantizar el objetivo que se persigue con la venta en pública subasta, que no es otro que obtener **el mejor precio posible por el bien ofrecido**.

Un proceso ejecutivo de esta naturaleza no puede convertirse en el escenario de propender hacer más gravosa la situación del demandado, y los procedimientos establecidos deben procurar por hacer prevalente y efectivo el derecho sustancial en el marco del debido proceso, y los derechos de defensa, contradicción y de acceso a la justicia, consignados en los **artículos 29, 228, 229 y 230 de rango Constitucional**, y por consiguiente, en este caso puntual si se torna procedente que se ajuste a derecho la actuación y se deje sin efectos el señalamiento de la fecha y hora de remate hasta que no se cuente con un nuevo avalúo debidamente actualizado a la presente calenda en donde se refleje el valor real del inmueble pretendido en almoneda.

En este caso particular, no se tiene conocimiento que el Juzgado haya hecho uso del poder instructor al ordenar como prueba de oficio la intervención de la perito prenombrada anteriormente, o si eventualmente el concepto que ésta rindió al interior del presente proceso fue asomado por la apoderada del extremo demandante, y lo que si es evidente es que se causa sorpresa de forma aparentemente desleal hacia esta defensa técnica al ser enterado de tal participación ya directamente con la mención formal argumentativa en el contenido de la providencia que ahora es materia de controversia, sin dar oportunidad a que este servidor hubiera efectuado algún pronunciamiento previamente a la emisión del **auto del 27 de mayo de 2022**.

Además, tampoco median fundamentos para desestimar técnicamente la idoneidad pericial del dictamen asomado por el suscrito ni la legitimidad del perito evaluador que lo elaboró, luego queda la sensación de que fue desechado de plano sin evidencia probatoria en su contra y mucho menos sin derecho a réplica de tal circunstancia.

En ese orden de ideas, se le insiste al Juzgado de que lo correcto y acertado es que para todos sus efectos legales debe acoger el avalúo comercial plasmado en el dictamen pericial aportado como anexo de este escrito, conforme lo ordena el **numeral 2° del artículo 444 del Código General del Proceso**, lo que arroja un valor del inmueble de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS (\$ 843.663.000.00) MCTE.**, pues tal monto es el que ha de definirse como precio de referencia para un futuro remate del inmueble.

El marco normativo permitió la controversia frente al traslado del avalúo catastral arrimado por la parte demandante (**numeral 2 del artículo 444 del C.G. del P.**), y por consiguiente, se cumplió con la carga de aportar el dictamen pericial enunciado, junto con sus documentos anexos –incluyendo el registro fotográfico del inmueble avaluado–, los cuales se allegaron en formato digital de versión de PDF.

ARNALDO TRUJILLO QUIJANO

ABOGADO

Ahora bien, emerge la situación de que frente a los pronunciamientos de la apoderada de la parte demandada, no aparece evidencia de su proceder leal para con su contraparte, pues no existe prueba que tal colega haya cumplido previamente y en el momento procesal oportuno con la carga impuesta por el **numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso.**

Conforme lo anterior, se deja expresa constancia de que el suscrito desconoce la presentación de los memoriales signados por la apoderada de la parte actora, ya que no he sido enterado por su autora de acuerdo a las previsiones de la norma precitada, y cuando ésta aportó el avalúo catastral solo lo conocí fue por conducto de la providencia posterior a este, y tampoco tengo conocimiento de si dicha mandataria judicial allegó información consecuente para facilitar la intervención de la nueva perito mencionada en el reciente proveído del 27 de mayo de 2022.

Debe tenerse en cuenta que me asiste total razón para solicitar que se proceda a sancionar a la apoderada de la contraparte, pues quedó acreditado que si infringió el deber procesal advertido previamente, sin encontrarse de por medio alguna causal de justificación de su conducta o que lo exonerare de atender positivamente esa obligación como sujeto procesal en este asunto.

Incluso en estos tiempos de emergencia sanitaria, y de atención virtual del servicio prestado por la Administración de Justicia, se ha procurado por el litigio en línea, cobrando mayor vigencia e importancia el que se de cabal cumplimiento a la disposición del **artículo 78, numeral 14, del Estatuto Adjetivo,** respecto de la carga ineludible a todo sujeto procesal y/o litigante, de remitir a su contraparte copia digital de todos los escritos radicados a conocimiento formal del Despacho, salvo cuando se trate de medidas cautelares, y en este caso concreto, al tratarse del escrito de impugnación con el fin de plantear reparos a la legalidad del cobro judicial de la obligación, a pesar de estar debidamente ejecutoriada la sentencia que resolvió de fondo el asunto, como también haber fenecido el estanco procesal oportuno para cualquier mecanismo de defensa en tal sentido, y a su vez promover objeción a la liquidación del crédito practicado por el Juzgado para actualizar los montos causados en este asunto, por supuesto que si le asistía el deber procesal de enviar un ejemplar de tal documento al correo electrónico de la parte actora, sin excusa alguna, y máxime con la normatividad vigente del **Decreto Ley 806 de 2020, que trajo la novedad de aplicar prevalentemente el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en las actuaciones procesales, en concordancia con las previsiones del artículo 103 del Código General del Proceso, igualmente le tocaba al signatario del respectivo escrito de cumplir con el deber de enviar por medio idóneo la copia digital o física del documento dirigido a su contraparte desde el mismo momento en que lo allegara al expediente, o a más tardar al día hábil siguiente a su presentación en el proceso judicial.**

Se reitera que en esta época de atención virtual y de implementación de las herramientas tecnológicas y de la comunicación en el servicio público de la Administración de Justicia, cobra mayor valor el cumplimiento a cabalidad de dicho deber procesal, puesto que se facilita el trámite de los procesos a los despachos judiciales, ya que se puede hacer uso efectivo de medidas de economía procesal y practicidad para el correcto impulso en las actuaciones,

ARNALDO TRUJILLO QUIJANO

ABOGADO

ahorrándose un desgaste para que todos los sujetos procesales en contienda tengan de las piezas documentales radicadas por canal electrónico.

Es un hecho incontrovertible que la jurista no envió ni en la misma fecha de su radicación del escrito correspondiente a la presentación de su avalúo catastral ni al otro día hábil de tal episodio, una copia digital a su contraparte de su respectivo memorial como tampoco de cualquier otro que haya presentado con posterioridad, por lo que se desprende corolariamente que obró con incuria e incumplimiento del respectivo deber procesal en tal sentido, y por consiguiente en ningún momento no ha cumplido a cabalidad con sus deberes litigiosos como representante de la parte demandante, y por consiguiente, debe asumir las consecuencias respectivas previstas en la normatividad procesal aplicable a este tipo de actuaciones.

Al respecto, entro a exponer unos argumentos frente a la viabilidad de este incidente, para que se proceda a resolver positivamente a sus pretensiones, a saber:

El **artículo 78 del Código General del Proceso**, atañe a los deberes de las partes y sus apoderados, y especialmente en su numeral primero establece:

“1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos.”

Sobre el tema, la **sentencia T-001 de 1997 de la Corte Constitucional**, explicó que **“el principio de la buena fe,”** exigible a las autoridades públicas en los estrictos términos que consagra el **artículo 83 de la Constitución**, debe ser atendido por los particulares que acuden al Estado en demanda de los servicios a su cargo.

La **Corte Constitucional, en Sentencia T-532 del 21 de noviembre de 1995**, expresó, con referencia al **artículo 83 de la Constitución Política**, que él impone a gobernantes y gobernados ***“el compromiso de obrar honesta y desprevenidamente, en el marco de unas relaciones de mutua confianza, de tal manera que, sometidos todos al orden jurídico y dispuestos a cumplir sus disposiciones con rectitud, no haya motivo alguno de recelo”***.

Frente a la administración de justicia, no sólo se espera que los jueces presuman la buena fe y la actuación honrada de quienes comparecen ante sus estrados, sino que -como comportamiento correlativo- el sistema jurídico demanda de las partes e intervinientes en los procesos judiciales la exposición de sus pretensiones y el ejercicio de sus garantías y derechos con arreglo a una efectiva buena fe procesal, indispensable para que la normatividad alcance los fines a ella señalados por la Constitución, que se sintetizan en el logro de un orden justo.

El debido proceso requiere, por otra parte, no solamente el sometimiento de los jueces a las formas propias de cada juicio y la plenitud de las garantías que la Carta otorga a todas las personas, sino que se hace menester el concurso de éstas para realizar los propósitos de la justicia a partir de la observancia estricta de las reglas de Derecho aplicables, lo que conduce a la consagración de tipos delictivos como el del fraude procesal, vigente entre nosotros (**Artículo 182 Código Penal**).”

ARNALDO TRUJILLO QUIJANO

ABOGADO

Igualmente, la **sentencia C-1194 de 2008 de la Corte Constitucional**, explica con suficiencia el alcance y contenido del principio de la buena fe del **artículo 83 Superior**:

“4. Principio de la buena fe

En artículo 83 de la Constitución Política establece que “[l]as actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.”

Esta Corporación tanto en sede de control abstracto[3] como de control concreto[4] de constitucionalidad se ha pronunciado con respecto al significado, alcance y contenido de este postulado superior.

La Corte Constitucional ha considerado que en tanto la buena fe ha pasado de ser un principio general de derecho para transformarse en un postulado constitucional, su aplicación y proyección ha adquirido nuevas implicaciones, en cuanto a su función integradora del ordenamiento y reguladora de las relaciones entre los particulares y entre estos y el Estado.[5]

En este orden de ideas la jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”[6]. En este contexto, la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada” [7]

En este sentido la Corte ha señalado que la buena fe es un principio que “de conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se presume, y dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente”[8].

Concretamente con respecto al contenido concreto del artículo 83 superior, debe la Corte indicar que conforme con este (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas.

Adicionalmente también ha estimado que la presunción de buena fe establecida en el artículo superior respecto de las gestiones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es simplemente legal y por tanto admite prueba en contrario.[9]

Estima la Corte, que en tanto la buena fe es un postulado constitucional, irradia las relaciones jurídicas entre particulares, y por ello la ley también pueda establecer, en casos específicos, esta presunción en las relaciones que entre ellos se desarrollen.

Por lo tanto observa la Corte que no se trata por esencia de un principio absoluto, y es por ello que la Corte Constitucional también ha admitido la posibilidad de que, excepcionalmente, la ley establezca la presunción de mala fe, y le atribuya los efectos que considere en cada caso, lo cual se traduce en si se admite o no prueba en contrario en cada caso.

ARNALDO TRUJILLO QUIJANO

ABOGADO

En efecto la Corte se pronunció en el sentido referido en la Sentencia C- 544 de 1994, en la que se ocupó de estudiar la constitucionalidad del inciso final del artículo 768 del código Civil el cual dispone:

"Pero el error en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario."

En esa oportunidad la Corte señaló que "[l]a norma demandada, interpretada a la luz de la Constitución, y despojada del efecto estigmatizante de la mala fe, significa que el legislador, simplemente, ha querido reiterar, en esta materia, la negativa general a admitir el error de derecho. La alusión a la mala fe es un recurso técnico para ratificar el anotado principio y, en este sentido, no puede ser inconstitucional."

Posteriormente en la Sentencia C-540 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad del inciso primero del artículo 769 del Código Civil, conforme con el cual "[l]a buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria." En esa providencia la jurisprudencia constitucional reconoce de manera expresa que "excepcionalmente, la ley puede establecer la presunción contraria, es decir, la presunción de mala fe." Adicionalmente señaló la Corte que:

"El artículo 769, pues, en concordancia con el artículo 66 del mismo Código Civil, prevé que la ley pueda determinar "ciertos antecedentes o circunstancias conocidas" de los cuales se deduzca la mala fe. Presunción legal contra la cual habrá o no habrá posibilidad de prueba en contra, según sea simplemente legal o de derecho."

Por lo anterior, es evidente que el artículo 769 no quebranta, ni podría quebrantar, el artículo 83 de la Constitución.

Se repite: la Corte, al declarar la exequibilidad del último inciso del artículo 768, aceptó implícitamente (y casi explícitamente, pues el artículo 769 se cita en la sentencia C-544/94) que el legislador sí puede establecer presunciones de mala fe, sin quebrantar la Constitución."

Con fundamento en lo anterior concluye la Sala que la ley puede determinar criterios, antecedentes, o circunstancias conocidas, de las cuales se deduzca en una situación particular, una presunción de mala fe, de naturaleza legal o de derecho, conforme con lo que ella misma disponga, y que por tanto admita o no prueba en contrario.

Recapitulando, es claro para la Corte que si bien el ordenamiento jurídico por regla general presume la buena fe de los particulares en sus relaciones, y en las actuaciones que adelanten ante las autoridades públicas, este es un principio que no es por esencia absoluto, de tal manera que en situaciones concretas admite prueba en contrario, y en este sentido es viable que el legislador excepcionalmente, establezca presunciones de mala fe, señalando las circunstancias ante las cuales ella procede."

Y recientemente, aunque de forma somera, la misma **Corte Constitucional** en su **sentencia C-420 de 2020**, explicó:

"294. La Sala discrepa de esta postura por las siguientes razones. Primero, la Constitución no señala, de manera específica, cada una de las formalidades con las que deben cumplir los documentos procesales para tener validez. Por el contrario, el artículo 83 instituye la presunción de buena fe en "todas las gestiones de los particulares ante las autoridades públicas"[469]. En el plano procesal, este principio

ARNALDO TRUJILLO QUIJANO

ABOGADO

implica que los jueces deben presumir la buena fe de quienes comparecen al proceso[470] y que las partes e intervinientes deben ejercer sus derechos conforme a la "buena fe procesal"[471]. En ese sentido, las presunciones de autenticidad en el marco de los procesos judiciales son constitucionalmente admisibles y no implican, en abstracto, un desconocimiento de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia[472].

Ahora bien, y entratándose de la materia concreta de definir que en los **artículos 78 a 81 del Estatuto Procesal** se encuentran las disposiciones que **regulan los deberes y responsabilidades de las partes y sus apoderados**, en donde pueden destacarse una serie de conductas que se esperan tanto de apoderados y partes, en especial, **el proceder con lealtad y buena fe**, no obrar temerariamente, guardar el debido respeto a los funcionarios y a los demás intervinientes dentro del proceso, bien sean sujetos procesales, terceros, auxiliares de la justicia, testigos, etc., informar por escrito cualquier cambio de domicilio que se produzca so pena de tener como válidamente surtida las notificaciones en aquel que inicialmente se señaló en la demanda o contestación, prestar toda colaboración al juez para la evacuación de pruebas y diligencias y acatar sus órdenes, entre otros.

Frente al eje temático que nos ocupa, es menester traer a colación el contenido del **numeral 14 del precitado artículo 78**, el cual dispone expresamente como un deber:

"14. Enviar a las demás partes del proceso después de notificadas, cuando hubieren suministrado una dirección de correo electrónico o un medio equivalente para la transmisión de datos, un ejemplar de los memoriales presentados en el proceso. Se exceptúa la petición de medidas cautelares este deber se cumplirá a mas tardar el día siguiente a la presentación del memorial. El incumplimiento de este deber no afecta la validez de la actuación, pero la parte afectada podrá solicitar al juez la imposición de una multa hasta por un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv) por cada infracción".

En este caso particular, **si bien es cierto que el expediente principal se remonta al año 2003**, naciendo al mundo jurídico como proceso ejecutivo singular, y que comenzó bajo el modelo del sistema escritural anterior, **no resulta menos verdad que la presente actuación de incuria profesional de la apoderada actuante en nombre de la demandante, se originó en plena aplicabilidad del Código General del Proceso, pues el mismo entró en vigencia desde el año 2016**, dándose plena ejecución a sus normas, entre las que se encuentra **la obligación de remitir a la contraparte mediante mensaje de datos dirigido a su correo electrónico reportado formalmente en el expediente, copia de los memoriales que se presenten con destino al proceso**, siempre y cuando, este se hubiere suministrado, sin que se condicione el cumplimiento de este deber a la implementación del plan de justicia digital.

Al respecto, cabe resaltar que **en el expediente el dominio electrónico reportado por el suscrito**, y por consiguiente al estar actuando la colega en nombre la demandante en este asunto, ésta ha conocido plenamente el correo electrónico de este servidor, y no podría ser de recibo el argumento defensivo o de excusa justificativa, el supuesto desconocimiento de dicha información, por lo que se infiere que no se avizora exoneración del cumplimiento del deber legal

ARNALDO TRUJILLO QUIJANO

ABOGADO

contemplado en el **artículo 78, numera 14 del Código General del Proceso**, máxime en estos momentos actuales de litigio virtual y de atención judicial por canales electrónicos y plataformas tecnológicas, regulados como mecanismos y herramientas válidas de información y telecomunicación establecidos en el **artículo 103 del mismo compendio normativo** y en armonía con el **artículo 3 del Decreto Ley 806 de 2020**.

Sobre el particular, el **Tratadista HERNÁN FABIO LÓPEZ BLANCO**, en su obra titulada **Código General del Proceso – Parte General, editorial DUPRÉ 2016, página 429**, expone que se trata de un concreto deber, puesto que la mayoría de los dispuestos en el **pluricitado artículo 78** no son nada diverso a dar cumplimiento a la advocación ***“se debe obrar de manera correcta”***, pero su incumplimiento difícilmente puede generar concretas consecuencias, lo que en este caso no sucede, debido a que si no se le remite a la contraparte copia del memorial que se presentó, a más tardar el día siguiente de cuando tuvo ocurrencia la radicación del respectivo escrito ante el despacho judicial de conocimiento de la actuación procesal, se le impone la sanción pecuniaria prevista en la norma, la que sólo podrá evadir el renuente si acredita que si remitió la copia o un motivo de fuerza mayor para no hacerlo, sin necesidad de entrar a considerar si se derivó en un perjuicio irremediable ocasionado a la contraparte, solo basta decir que no se trata un simple acto de procedimiento, sino que se trata de una situación compleja, en el sentido de que es **un deber legal impuesto por el Código General del Proceso a las partes**, y es el mismo legislador el que en la norma adjetiva, prevé la sanción, sin supeditarla al perjuicio.

En consecuencia, se solicita al Juzgado que con fundamento en las anteriores consideraciones, se entre a emitir pronunciamiento formal frente a la situación planteada con motivo del flagrante incumplimiento de la parte ejecutante sobre el deber procesal que le asistía de remitir un ejemplar en copia digital del escrito de aporte de su avalúo catastral del inmueble y de cualquier otro escrito posterior con destino a su contraparte, pues al no hacerlo oportunamente, esto es, a más tardar al día siguiente de la radicación virtual de su memorial, ha incurrido en un acto de deslealtad procesal y violación del deber consignado en el **numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso**, sin encontrarse hasta el momento causal de justificación para eximir dicha conducta, y por tanto, debe resolverse de fondo el respectivo incidente sancionatorio e imponer la medida de multa económica a la parte renuente o infractora del deber procesal correspondiente.

Solicitud.-

Conforme los argumentos esgrimidos en este memorial, solicito que se ordene la reposición del auto emitido el 27 de mayo de 2022, por el que se acogió como definitivo el monto señalado con base en el avalúo catastral del inmueble para que sirva de referencia económica a la hora de señalar el remate del inmueble de propiedad de mi poderdante, y se ordene que en su lugar se debe acoger el valor determinado en el dictamen pericial allegado por el suscrito, o en su defecto, si se llegare a mantener la decisión inicial que se cuestiona a través de este memorial, se le de trámite al recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria.

ARNALDO TRUJILLO QUIJANO ABOGADO

Adicionalmente se solicita también darle trámite al incidente sancionatorio en contra de la apoderada de la parte demandante por el marcado incumplimiento del deber de lealtad procesal previsto en el **numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso en concordancia con las disposiciones de la materia del Decreto Ley 606 de 2020.**

Fundamentos Jurídicos.-

Solicito tener en cuenta las normas y disposiciones legales y jurídicas mencionadas en este escrito, así como los **artículos 318 y siguientes del Código General del Proceso**, como fundamentos de apoyo de esta impugnación.

El suscrito recibe notificaciones en el sitio informado oportunamente y que reposa en el expediente.

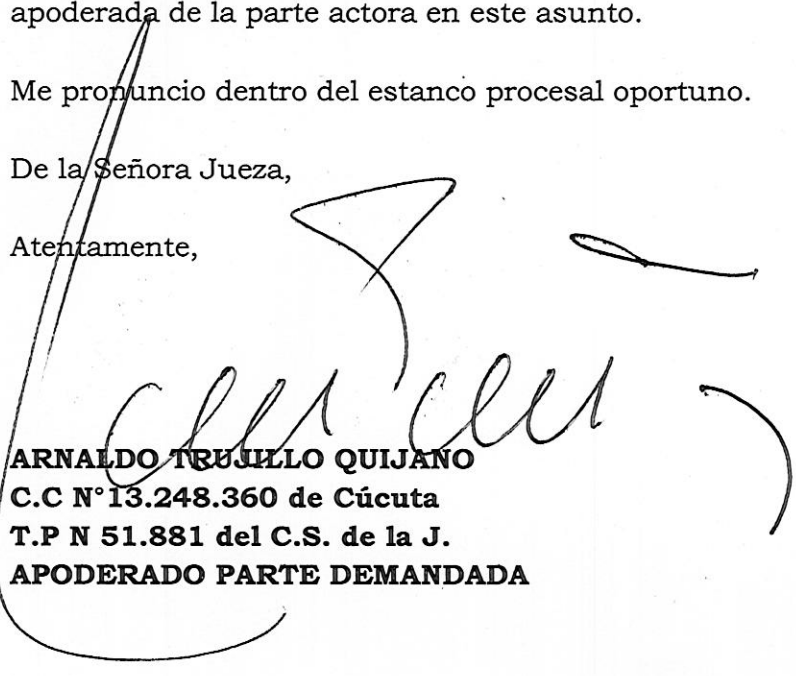
Las demás partes intervinientes las reciben conforme los datos obrantes en el proceso.

En los anteriores términos, dejo sentada la exposición jurídica correspondiente al sustento de la impugnación oportuna que hago de la providencia cuestionada, dejando expresa constancia de que un ejemplar digital del presente escrito se le remite a la dirección electrónica reportada por la apoderada de la parte actora en este asunto.

Me pronuncio dentro del estanco procesal oportuno.

De la Señora Jueza,

Atentamente,



ARNALDO TRUJILLO QUIJANO
C.C N°13.248.360 de Cúcuta
T.P N 51.881 del C.S. de la J.
APODERADO PARTE DEMANDADA



Arnaldo Trujillo <arnaldotrujillo68@gmail.com>

IMPUGNACIÓN

2 mensajes

Arnaldo Trujillo <arnaldotrujillo68@gmail.com>
Para: yayita1174@yahoo.es

3 de junio de 2022, 16:37

IMPUGNACIÓN ITERLOCUTORIO DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2022



IMPUGNACIÓN AUTO DEFINICIÓN AVALÚO DE INMUEBLE.pdf
945K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: arnaldotrujillo68@gmail.com

3 de junio de 2022, 16:37

**No se encontró la dirección**

Tu mensaje no se entregó a **yayita1174@yahoo.es** porque la dirección no se encuentra o no puede recibir correos electrónicos.

Respuesta del servidor remoto:

552 1 Requested mail action aborted, mailbox not found

Final-Recipient: rfc822; yayita1174@yahoo.es
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mx-eu.mail.am0.yahoodns.net. (188.125.72.73, the server for the domain yahoo.es.)
Diagnostic-Code: smtp; 552 1 Requested mail action aborted, mailbox not found
Last-Attempt-Date: Fri, 03 Jun 2022 14:37:50 -0700 (PDT)

----- Mensaje reenviado -----
From: Arnaldo Trujillo <arnaldotrujillo68@gmail.com>
To: yayita1174@yahoo.es
Cc:
Bcc:
Date: Fri, 3 Jun 2022 16:37:35 -0500
Subject: IMPUGNACIÓN
----- Message truncated -----